

El lehendakari pedirá a Sánchez flexibilizar el límite de deuda para apoyar a las empresas

El Gobierno vasco admite que el acuerdo de Moncloa con ERC sobre endeudamiento podría tener efectos «relevantes en términos de Cupo»

D. GUADILLA

VITORIA. El Gobierno vasco quiere estar preparado ante la «incierta» situación geopolítica que se vive en estos momentos a nivel global, especialmente, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Las perspectivas no son del todo malas y, de hecho, el propio vicelehendakari segundo y responsable de Economía, Mikel Torres, se felicitó ayer en el Parlamento de los datos de empleo y de crecimiento económico que hay en Euskadi. Pero de manera preventiva, el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales quiere tener más munición, sobre todo, para apoyar al sector tecnológico e industrial. Y en esa batería de medidas, el lehendakari anunció que pedirá al Gobierno central que el País Vasco pueda flexibilizar su límite de deuda.

El debate sobre el endeudamiento ha cogido vuelo tras el acuerdo alcanzado por Moncloa con ERC para condonar el pasivo de Cataluña. Para mitigar la tormenta política y tratar de que no pareciera una cesión a los independentistas, el Gobierno de Pedro Sánchez amplió el pacto a todas las comunidades del régimen común. El total se eleva a 83.000 millones.

Euskadi y Navarra se quedan fuera por estar bajo el modelo foral, pero eso no significa que no puedan verse afectadas. Pradales admitió que de llevarse a cabo esa posible condonación de la deuda, esta no desaparecerá. «Sino que quedará en manos del Estado». «Y esto es relevante en términos de Cupo porque la cuen-

ta a pagar sería mayor dado que asumimos el 6,24% de las cargas del Estado vinculadas a la deuda pública y a sus intereses», resaltó desde la tribuna.

De ahí que uno de los primeros objetivos del Gobierno vasco, según resaltaron fuentes del Departamento de Hacienda, será «neutralizar» los efectos que pue-

da tener en las Cuentas de Euskadi esa hipotética quita de deuda –algo que está por ver porque no está claro que el Gobierno logre los apoyos necesarios en el Congreso– a partir de 2027, cuando se negocie la nueva ley quinquenal del Cupo. Hasta entonces, y según la consejería liderada por Noël d'Anjou, nada cambiará.

Pero, en realidad, el objetivo del Gobierno vasco es más amplio. Porque no solo se trata de evitar los posibles perjuicios que pueda ocasionar a las arcas vascas a futuro el acuerdo sobre la quita de deuda. También se trata de actuar en el corto plazo.

Y fue ahí donde Pradales anunció que en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Concerto –para la que no hay fecha– pidi-

El tope actual está en el 13% del PIB, aunque la previsión con la que están hechos los Presupuestos se queda en el 11,4%

rá que Euskadi pueda flexibilizar su límite de deuda. La de Euskadi no puede superar el 13% del PIB, aunque los Presupuestos de este año están hechos con un previsión del 11,44%. De hecho, el Gobierno quiere que el Parlamento dé luz verde ya al incremento del pasivo de 1.000 millones que anunció hace unos días Pradales. El Ejecutivo necesita el aval de la Cámara porque supone una modificación de las Cuentas.



Homenaje al primer ertzaina asesinado

La academia de Arkaute homenajeó ayer al superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arkotxa en el cuarenta aniversario de su asesinato por ETA en Vitoria, tal día como ayer de 1985. Díaz Arkotxa, que tenía 52 años, se convirtió en el primer agente de la Policía autonómica vasca asesinado por la organización terrorista. Posteriormente otros catorce ertzainas fueron asesinados por la banda terrorista.

Modelo vasco de acogida

KEPA AULESTIA



El Gobierno vasco, por boca de la consejera de Autogobierno y portavoz María Ubarretxena, reiteró el miércoles su intención de analizar la iniciativa legislativa impulsada por PSOE y Junts para delegar en la Generalitat catalana competencias relacionadas con la inmigración, por si pudiera ser «conveniente» para Euskadi reclamar también nuevas atribuciones. Señalando al tiempo desconocer los «detalles» del acuerdo Sánchez-Puigdemont. Es de entender que más allá del articulado

de la proposición de ley registrada el martes en el Congreso.

El jueves, el presidente se refirió desde Bruselas a la eventualidad de que la norma aprobada no sea aprobada por las Cortes Generales –ni siquiera tomada en consideración para su trámite–, despejando la cuestión con un «partido a partido». Sin duda porque la «necesidad» del Ejecutivo Sánchez está en mantener la sintonía con Junts sobre una materia cuyo desarrollo autonómico no estaría por ahora en manos de los de Puigdemont. Y

su «virtud» sigue el juego de las dos versiones a las que Moncloa y sus interlocutores independentistas parecen habituados ya.

Junts pretende levantar un dique de contención ideológico frente al auge de Aliança Catalana y otros grupos en el extremo reaccionario del secesionismo. Si la proposición sale adelante, será el gobierno de Salvador Illa el que tendrá que retratarse frente a las exigencias de Puigdemont. Aunque para entonces la legislatura a la que se aferra Sánchez estará ya muy avanzada, con Presupuestos o con su prórroga. Y si la «mayoría de progreso» se deshila por la narrativa xenófoba a la que recurre una y otra vez el «partenaire» de Waterloo, y la delegación de competencias se queda en nada, asistiremos al enésimo combate de relatos en el «bloque de la in-

vestidura» ya exhausto.

La consejera Ubarretxena y su Gobierno se han vuelto a mostrar «pujolistas» en el tema. No pospujolistas. Cautela antes que ventajismo. La Euskadi institucional podría hacerse cargo de más competencias en materia de inmigración. Convertir el autogobierno vasco en un puerto de acogida aún más eficiente para quienes arriben a partir de mañana mismo. Y en un entorno más inclusivo para quienes, menores y mayores, están ya aquí.

Pero el corolario de que «cuantas más competencias, más bienestar» continúa restringiéndose a los aborígenes. Porque la Euskadi institucional mira a todo esto de reojo, en una comunidad que percibe el doble de población extranjera de la existente –un 24,2% frente al 13,2% real–. Con una mayoría

abrumadora del 82,8% convencida de que la inmigración aumentará. Reacia a la expulsión de quienes no encuentren trabajo, pero también a regularizar su situación en tal caso. Acogedora y recelosa a la vez. Dispuesta a compartir los servicios existentes, pero contraria a la puerta abierta del agrupamiento familiar, aunque la familia sea el núcleo identitario de los vascos. Así lo certifica Ikuspegi.

El oasis vasco, con un 13,2% muy diverso de población extranjera, puede permitirse el lujo de ensalzar el «modelo vasco de acogida». En Cataluña es de cinco puntos más, en una evolución pareja con la de España en su conjunto. Cinco puntos de diferencia, uno a uno, son el abismo que preserva a Euskadi de incurrir su particular Euskal Aiantza.